

CAE y la impericia gubernamental

El Ejecutivo ha informado que la iniciativa que materializa la promesa de condonación de las deudas del CAE, y de un nuevo sistema de financiamiento estudiantil, se presentará al Congreso en octubre y no en septiembre, a pesar de los reiterados anuncios de las autoridades de que el proyecto entrará antes que la ley de Presupuesto de 2025.

Si bien la postergación no parece un gran problema, adquiere otra connotación a la luz de los inconvenientes que ha enfrentado la administración del Presidente Boric para gestionar el cumplimiento de su propuesta de “condonación universal” del CAE. Desde su inclusión en el programa en el año 2021, diversos expertos han advertido sobre los costos que tendría la aplicación literal de la medida y han anotado que no hubo un análisis técnico riguroso de los montos involucrados; hay estimaciones que hablan de hasta US\$ 11 mil millones.

Entre las razones que se han mencionado a nivel oficial para justificar el aplazamiento se encuentran la recargada agenda del Congreso, marcada por las leyes de seguridad pública y las acusaciones constitucionales a magistrados de la Corte Suprema, dar prioridad al Presupuesto y retrasos

“Las marchas y contramarchas del Ejecutivo amenazan restar legitimidad y arruinar el diseño de las políticas públicas de educación superior”.

en el trabajo prelegislativo; el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, agregó a lo anterior la importancia del resultado del proyecto de cumplimiento tributario para conocer los recursos con que contará el fisco. Con todo, fuentes de la coalición gubernamental han subrayado también que todavía no habría definiciones respecto de los deudores que serían beneficiados y en qué proporción.

La dilación del Ejecutivo ha causado irritación parlamentaria, tanto en el oficialismo como en la oposición. En la derecha se ha planteado que no hay claridad conceptual dentro del Gobierno o que incluso podría haber un uso electoral del timing de la ley de cara a las elecciones regionales y municipales.

Desde luego las sucesivas postergaciones y variaciones del proyecto del CAE son un reflejo de las dificultades del Ejecutivo para conciliar la amplitud de la promesa de campaña con la incapacidad práctica de

llevarla a cabo; diversos especialistas han observado que en el llamado trabajo prelegislativo solo se han debatido ideas generales, pero que no ha habido detalles respecto de los alcances del perdono, los recursos para hacerlo sostenible y el futuro modelo de financiamiento estudiantil.

Asimismo, se ha destacado que, en el actual escenario de intereses ciudadanos, el problema del CAE no ocupa un lugar significativo; de acuerdo con la última encuesta Cadem, las personas consideran más relevante invertir en infraestructura escolar (28%), mejorar los sueldos de los profesores (19%), evitar la deserción (18%), aumentar la gratuidad universitaria (13%), pagar la deuda histórica (12%) y condonar el CAE (9%).

La promesa original de condonación, combinada con la demora y falta de claridad de la autoridad, han creado expectativas que fácilmente pueden verse frustradas; las marchas y contramarchas del Ejecutivo implican el riesgo cierto de que ningún sector se reconozca conforme con la propuesta, y amenazan restar legitimidad y arruinar el diseño de las políticas públicas de educación superior, las que demandaban otro tipo de tratamiento y búsqueda de acuerdos. El déficit en la elaboración del proyecto es una demostración de impericia en la toma de decisiones.